

Colombia Ordena la Devolución de Tierras Agrícolas Robadas

La motivación del cambio es el TLC con Estados Unidos, dicen los Críticos

By [Juan Forero](#)

Washington Post Foreign Service

Lunes, 23 de Marzo de 2009; Page A08

Carmen del Darién, Colombia - Como en tantos crímenes de guerra, lo que ha sucedido aquí, en la densa selva húmeda del noroeste de Colombia hace más de una década podría haber sido fácilmente olvidado. Milicias ilegales han obligado a centenares de negros agricultores pobres a dejar sus tierras, que empresarios bien conectados políticamente han usurpado y convertido en lucrativas plantaciones de aceite de palma.

Los agricultores desplazados, conscientes de que los cientos de miles de personas desarraigadas por causa del largo conflicto civil en Colombia rara vez volvieron a casa, pensaron que nunca verían de nuevo sus tierras. Pero en este caso, el gobierno ordenó recientemente a nueve empresas de aceite de palma a devolver miles de hectáreas a los agricultores, y la Oficina del Fiscal General está investigando a las empresas de las acusaciones de homicidio, robo de tierras y desplazamiento forzado.

El gobierno, sin embargo, está motivado más por su propio interés que por altruismo, dicen los grupos de derechos humanos, que también culpan a ese estado tanto de negligencia como de ayuda para que las empresas de aceite de palma pudieran fácilmente usurpar esas tierras. El gobierno del Presidente Álvaro Uribe quiere con carácter urgente un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y los Demócratas en el Congreso han dejado claro que el pacto depende de los avances en materia de derechos humanos en Colombia, especialmente para los negros y otros grupos marginados.

“Creo que está directamente relacionado, no hay duda de ello”, dijo el Rep. Donald M. Payne (DN.J.), miembro de la subcomisión del Hemisferio Occidental, sobre la atención del gobierno colombiano a la cuestión de la tierra en el departamento del Chocó. “No estoy tan seguro de que estos esfuerzos del gobierno se hubieran hecho si no hubiera sido por la presión externa que hemos ejercido”.

La difícil situación de los afro-colombianos ha sido de particular interés para los 42 miembros del Grupo Negro del Congreso, varios de cuyos miembros, incluyendo Payne, se han reunido con Uribe para plantear sus preocupaciones. Algunos también han viajado a Chocó, bajo una fuerte custodia militar, visitando zonas sumidas en la pobreza y la violencia.



GRAPHIC: Gene Thorp - The Washington Post

Pocos en este país han sufrido tanto como los afro-colombianos, que representan más del 20 por ciento de los 45 millones de colombianos, la más grande comunidad negra de habla hispana en América.

Los negros colombianos, descendientes de esclavos africanos, han sufrido asesinatos en masa, desplazamientos forzados y combates en las tierras ancestrales - la dura realidad de un brutal conflicto latente, que involucra escuadrones de muerte, rebeldes marxistas y traficantes de drogas. La población afro-colombiana en Chocó, donde la mayoría de las personas son negras, tiene una tasa de mortalidad infantil que es dos veces la media nacional y una tasa de pobreza que supera el 75 por ciento.

“La verdad es que el gobierno colombiano no nos valora”, dijo Ligia María Chaverra, 68 años, líder de una comunidad en el departamento de Chocó. “Siempre ha sido así”.

La administración Uribe dice que ha hecho más para los afro-colombianos que cualquier otro gobierno - y los esfuerzos en el Chocó son un ejemplo del compromiso del Estado. Abogados, trabajadores sociales, agrónomos, fiscales y otros especialistas de diversos ministerios se han volcado sobre esta región, conocida como Urabá.

"Este es un caso muy importante para el gobierno", dijo Catalina Riveros, abogada del Ministerio de Agricultura que ha estado trabajando en el caso. “Estamos tratando de recuperar las tierras que fueron tomadas de las comunidades afro”.

Pero la imagen del papel del gobierno, el de un incansable defensor de los negros pobres, contrasta fuertemente con la versión que se desprende de documentos judiciales y declaraciones de los comandantes paramilitares encarcelados y un ex asesor financiero de la mayor compañía de aceite de palma en la región, Urapalma.

Investigadores del Gobierno dicen que los escuadrones de la muerte, ilegales y contra-guerrilla, que se expandieron en 1996 y 1997 trabajaron con las tropas comandadas por el general Rito Alejo del Río, quien se encuentra actualmente en la cárcel por cargos que incluyen asesinato y colaboración con grupos paramilitares. Más de 100 pobladores fueron asesinados, y al menos 3.000 agricultores se vieron obligados a abandonar 99.950 hectáreas, una franja de alrededor de un tercio del tamaño de Rhode Island.



Rentería es uno de los campesinos que regresó a su tierra en el Chocó para encontrarla plantada con árboles de palma de aceite, uno de los cuales está tumbando. (Por Juan Forero - The Washington Post)

Ligia María Chaverra, de amarillo, es una líder de la comunidad afro-colombiana en el país, que es la comunidad negra más grande en la América de habla hispana. (Juan Forero - The Washington Post)



Enrique Petro fue expulsado de sus tierras por los paramilitares en la década del 90, y sólo recientemente ha regresado. (Juan Forero - The Washington Post)

Las empresas de palma construyeron carreteras a través del bosque y sembraron cerca de 6.000 hectáreas con palma africana, que se utiliza como biocombustible, y en muchos otros productos. Los pocos agricultores que tenían títulos individuales se vieron obligados a vender. “Ellos decían ‘Venda o su viuda lo hará’”, recordó un agricultor, Eustaquio Polo Rivera, de 40 años.

La comunidad recibió las tierras con un título colectivo, en virtud de una disposición constitucional que le da especial derecho sobre la tierra a los afro-colombianos. Aunque las tierras de propiedad colectiva no se pueden vender, investigadores y funcionarios del gobierno dijeron que las empresas superaron este obstáculo mediante la creación de falsos títulos y registros.

Documentos de la Fiscalía General de la Nación y de los Organismos de Control obtenidos por The Washington Post muestran que préstamos estatales fueron utilizados para financiar las operaciones de las empresas de aceite de palma. Urapalma recibió la mayor parte de su financiación inicial del Estado, ha dicho la Contraloría, y la empresa captó el 89 por ciento de los incentivos entregados entre 2002 y 2006 por el fondo de desarrollo rural para las empresas en el Chocó.

El sector de empresas de aceite de palma establecidas hace tiempo poco sabía acerca de estas empresas. “Aquí, cuando usted no puede ver quiénes son los accionistas entonces usted empieza a alarmarse”, dijo Jens Mesa, quien encabeza la federación de aceite de palma en Colombia, Fedepalma. “Cuando la gente dice, ‘No preguntes’, es porque hay algo oscuro”.

Documentos judiciales y testimonios muestran que algunas de las empresas tenían estrechos vínculos con los grupos ilegales de paramilitares que masacraron a los pobladores en una guerra sucia contra los rebeldes izquierdistas. Los comandantes de esos grupos han desarmado a sus fuerzas y están ofreciendo testimonios sobre sus alianzas con los militares y funcionarios gubernamentales a cambio de beneficios judiciales.

Los vínculos, de acuerdo a los registros y el testimonio de los mandos, alcanzó la cima de Urapalma y de otra empresa, Palmas de Urabá, cuyos representantes se reunieron con Vicente Castaño, un temido comandante paramilitar quien públicamente había expresado su plan de cubrir la región con palma africana.

Otro comandante encarcelado, Ever Veloza, dijo a los fiscales que uno de los hombres contratados por las empresas para “legalizar” las usurpaciones de tierras era un jefe paramilitar llamado Rodrigo Zapata, quien era buscado en relación con cientos de asesinatos. El pasado mes de abril, en un escándalo que sacudió el país, Zapata ayudó a organizar una reunión secreta en el palacio presidencial entre altos funcionarios presidenciales y emisarios de un comandante paramilitar encarcelado.

“Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación están empezando a aclarar la historia de estas empresas”, dijo Víctor Abramovich, jefe de una delegación de la Organización de Estados Americanos que visitó al Chocó y elaboró un informe sobre el caso. “No estoy diciendo que todas las empresas están ligadas a los paramilitares, pero hay algunas que están directamente vinculadas”.

Funcionarios de la compañía Palmas de Urabá acusados de tener vínculos con los grupos paramilitares no han devuelto las llamadas, tampoco Abelardo de la Espriella, un abogado que representa a Urapalma.

Sin embargo, un ex gerente y abogado de Urapalma, Carlos Daniel Merlano, dijo que Urapalma y las otras empresas pensaban que las tierras habían sido adquiridas legalmente. Dijo que el gobierno no informó a las empresas sobre el desplazamiento forzado de los agricultores. “Si la empresa hubiera sabido que esta tierra pertenecía a los Afros, nadie hubiera invertido en esa tierra”, agregó.

Tres de las empresas acordaron devolver 1.200 hectáreas, que el gobierno entregó a la comunidad la semana pasada. Y algunos agricultores, como Enrique Petro, han retornado.

“Esta es la palma africana que plantaron en mi finca, ilegalmente, sin permiso”, dijo Petro, mientras se ofrecía al visitante un recorrido a través de un campo de palma. “Ellos mataron familias, hijos, amigos y vecinos para plantar la palma, por lo que estas plantaciones estás manchadas con sangre”.

Las otras empresas, que poseen cerca de 6.700 hectáreas donde el gobierno ha dicho que son títulos falsos, han dicho a funcionarios del gobierno que quieren llegar a un acuerdo.

“El gobierno les dijo que no había nada que negociar”, afirmó Riveros, abogado del Ministerio de Agricultura.

El caso está ahora enredado enredado en los tribunales.

Aquí en el Chocó hay escepticismo, en gran parte debido a que algunos dirigentes han sido amenazados y uno, Walberto Hoyos, fue asesinado en octubre.

“Las redes criminales están todavía allí”, dijo Germán Romero, un abogado de un grupo de derechos humanos, Justicia y Paz. “Así que los campesinos tienen miedo”.

<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/22/AR2009032202029.html>

Traducción: Observatorio Social sobre Etnodesarrollo,
Conflicto Armado y Desplazamiento en el Chocó
FORO INTERÉTNICO SOLIDARIDAD CHOCÓ